



Centro Andino de Estudios Estratégicos

CENAE

El magnicidio perfecto

Análisis de la crisis del 30 de septiembre del 2010 en Ecuador

Mario Ramos

Alexei Páez

08/octubre/2010

El magnicidio perfecto

Análisis de la crisis del 30 de septiembre del 2010 en Ecuador

Mario Ramos
Alexei Páez

8 de octubre del 2010

La crisis del 30S reveló un conjunto de problemáticas que ya estaban insinuadas en el escenario previo, que requieren un análisis en profundidad, tanto, en lo que se refiere a sus antecedentes, su proceso y potenciales consecuencias.

En base a los datos que disponemos, los elementos observados, articularemos un análisis que aporte a la comprensión de la crisis producida por la sangrienta sublevación policial y militar, (la actuación de la Fuerza Terrestre en el rescate al Presidente de la República, la opacidad deliberada de la Fuerza Naval, ha soslayado los movimientos militares, en un complejo campo de interacciones entre las Fuerzas, al igual que dentro de ellas, que produjeron la toma del aeropuerto de Quito por parte de un sector de la Fuerza Área Ecuatoriana – FAE), que nuevamente colocó al Ecuador en una situación política e institucional de ‘pronóstico reservado’.

El escenario de crisis no está disuelto, es más está planteado en un contexto distinto, catalizado por la misma sublevación que implicaba un golpe de Estado potencial y por ello es necesario ser lo más exactos posibles en su estudio para dar el mejor tratamiento a un problema cuyas proyecciones no se agotaron en el 30S. Las condiciones estructurales que posibilitaron el intento de golpe de Estado permanecen, y sus consecuencias deben ser, en lo posible, pronosticadas para aportar a la consolidación de la República, la Democracia y el Estado.

Culpar de todo a Sociedad Patriótica y a los hermanos Gutiérrez nos puede hacer perder de vista otros factores o variables que incidieron en la crisis y en general en el proceso conspirador que siempre estuvo en curso. Hacer lecturas simplificadas es un error que puede llevarnos a cometer graves equivocaciones.

Después de la primera fase de creación del marco constitucional del 2008, resultante de una crisis orgánica del régimen político (crisis de legitimidad institucional; crisis del sistema político, esto es de los sistemas de mediación entre la sociedad y la forma del Estado, representada en la articulación regional e interétnica) que se arrastraba hasta el triunfo de la Revolución Ciudadana; la segunda fase, que está siendo torpedeada por los intereses tradicionales, busca institucionalizarse a través de la promulgación de leyes orgánicas.

Por ello, es necesario señalar que el centro de gravedad donde converge el conflicto de lo que antes se conocía como ‘lucha de clases’, -ahora le podemos llamar de cualquier forma-, es la Asamblea Nacional, donde se expresa la sociodiversidad característica del Ecuador y la incapacidad de las élites tradicionales de asumir las consecuencias de su gestión hegemónica y disolutoria, interviniendo para evitar una reconstrucción de la comunidad política nacional con un sentido redistributivo, participativo y soberano.

Las leyes que impulsan la puesta en práctica de la Constitución y proyecto político de la Revolución Ciudadana, son objeto de una cerrada resistencia y constante boicot para dificultar su gestación y aprobación, tanto por la derecha como por una autocalificada “verdadera izquierda” que en esta crisis se develó de cuerpo entero, anunciando apoyos hacia los sectores más retardatarios de la institucionalidad estatal, durante el momento

en que se desenvuelve un proceso de potencial ruptura democrática, convirtiéndolos en “organizaciones políticas y sociales” asociadas al corporativismo pretoriano, del cual participan subordinadamente.

En ese marco el tratamiento de la Ley Orgánica de Servicio Público fue aprovechado por las fuerzas opositoras y conspiradoras para acentuar la constante manipulación que durante dos años, -por lo menos-, se ha hecho en torno a temas como seguridad social, condecoraciones, bonificaciones, salarios, etc., tanto de militares como de policías.

Sociedad Patriótica, es un partido político que representa una ideología inconexa y variable con tintes fascistas (con pretensiones de movilizar masas), articulado a intereses imperiales. Su cúpula está compuesta por militares y policías en servicio pasivo, con fuertes relaciones clientelares al interior de los organismos armados del Estado: al tener nexos personales y orgánicos con la Policía y FFAA, saben como manejar los temas mencionados; constantemente buscan generar organizaciones parainstitucionales, combinadas con operaciones psicológicas y mediáticas, con la aspiración de provocar hechos como los sucedidos el 30 de septiembre.

A ello contribuyó, -los hechos lo evidencian- que el mando civil no logró disipar las dudas e inquietudes que esos temas generaban en las filas de la Fuerza Pública. La separación entre la sociedad militar, civil y política aparecía mediada por los intereses de Sociedad Patriótica ante el conjunto del personal armado de base. El manipuleo y desinformación a la que fue sujeta la tropa y también la oficialidad baja y media, demuestra que no se consiguió establecer una correcta comunicación entre mando civil y personal militar y policial para una cabal comprensión del sentido de la reforma legal y su necesidad encuadrada en la racionalización de la organización del Estado.

Este es un tema tratado extensivamente, especialmente en el caso argentino y chileno, reflexión causada a raíz de las brutales dictaduras del siglo pasado. En el caso ecuatoriano las particularidades generan una diferencia sustancial, lo que nos permite explicarnos el carácter específico de nuestras FFAA en relación con la sociedad e institucionalidad, tanto históricamente como en las coyunturas críticas de los últimos 15 años.

En el problema señalado la autoridad civil, debido a la gran distancia existente para la comprensión de las instituciones armadas, puso un sobre énfasis en tratar el asunto con los mandos institucionales ya que siempre vio el peligro en ese nivel, y no en la tropa y oficialidad subalterna. Sin embargo, los acontecimientos demostraron que no se podía dejar la tarea explicativa de la ley a los altos mandos, menos aún cuando existían operaciones propagandísticas e ideológicas, incluso organizacionales (el autodenominado GAP – Grupo Armado de la Policía) que revelaban una crisis de carácter sistémico en la institución policial, instigado por actores políticos plenamente identificados: Sociedad Patriótica.

La política de este gobierno siempre estuvo, está y estará encaminada a mejorar las condiciones de vida y profesionales de militares y policías, con un enfoque de política social y estatal y no de mantenimiento de prebendas que reproducen la separación y arrogancia de las instituciones armadas frente al mundo civil, sus instituciones, la misma democracia.

Se buscó redireccionar determinados rubros sin disminuir nunca el monto presupuestario global, por el contrario, incrementándolo, como queda claro al invertir los tres millones de dólares del presupuesto que el personal policial recibía en regalos de Navidad, para reconducirlos en proyectos de vivienda fiscal, y de esta manera solucionar gradualmente un problema social grave que sufre una institución donde la movilidad de

su personal es alta. Esto fue consensuando con el Alto Mando policial ¿Conocían los aproximadamente 45.000 policías ecuatorianos cuestiones como éstas?

Si bien el corporativismo y clientelismo tienen una matriz histórica, el neoliberalismo lo promovió y profundizó, como estrategia para fragmentar la acción común, en todos los espacios de la vida social. Especialmente en el sector público generó la ‘cultura del aguinaldo’ y cada organismo se esmeró por conseguir prebendas, migajas del festín de la larga noche neoliberal y sus aventajados gestores e intereses, como los famosos ‘bonos espirituales’ de USD \$10.000 que en el año 2008 los empleados de la Procuraduría se auto concedieron, y que luego se les obligó a devolver, por presión de la opinión pública harta de la irracionalidad del manejo de los fondos estatales.

Poner orden, racionalizar este tipo de cosas, es lo que la Ley Orgánica de Servicio Público se propone. La ley es clara en establecer las particularidades laborales de militares y policías (incluso se incluye por primera vez a los bomberos) y como nunca antes, faculta que se reconozca esas peculiaridades en los respectivos salarios.

Se debe comprender que militares y policías son funcionarios/servidores públicos, ellos no son ni la ley ni la autoridad, sino el vínculo operativo para que la ley y la autoridad del Estado se exprese de manera racionalizada, institucional y responsable.

A diferencia de otros sectores que han coincidido contra la racionalización y re-institucionalización del Estado, los militares y policías tienen capacidad de presión porque tienen las armas. Por ello la ciencia política latinoamericana contemporánea, a raíz de las terribles de las dictaduras del cono sur, señala que una “huelga” de policías y militares es en sí mismo un golpe de Estado. No hay espacio para interpretarlo como un acto fortuito.

Necesidad de estudiar la MODALIDAD empleada para la ruptura democrática.

Da la “casualidad” que los gobiernos latinoamericanos que impulsan un proyecto redistributivo, de cambio institucional integral que genera participación, con sus consecuencias geoestratégicas, integradoras, soberanas e independientes de hegemonías imperiales son los que han sufrido fracasados golpes de Estado y un solo caso exitoso, pero condenado por la comunidad internacional.

Es por ésta razón, que frente a los hechos que se fueron suscitando: toma del aeropuerto de Quito por parte de la FAE; **instantánea** aparición de saqueos en la ciudad de Guayaquil; movimientos de insubordinación de policías y militares (ejemplificados hasta la saciedad con las manifestaciones al interior y exterior del Ministerio de Defensa) a nivel nacional en distintas unidades; llamamiento de Pachakutik (ahora la gente los llama chapakutik) y movilizaciones del maoísmo emepista a favor de las demandas policiales de prebendas –o como se dijo, ‘el pueblo armado también es explotado’- para intentar formar un frente que movilice procesos sociales supuestos, que exija la salida del Presidente Rafael Correa, tratando de repetir experiencias de otros golpes de Estado que ha vivido el país y que no tuvieron ninguna resonancia.

La actitud de la Escolta Legislativa que prácticamente se tomó la Asamblea Nacional y se puso a órdenes de Gilmar Gutiérrez; intento de tomarse los pozos petroleros en las provincias amazónicas por parte de policías; suspensión de la atención de los procesos migratorios del aeropuerto de Quito desde las 5H00 de la mañana; claramente indican que no fue el Presidente el que provocó su agresión ni la sublevación, misma que evidentemente estaba preparada en un sistema de escalada aparentemente espontánea,

y que en caso de fracaso podía ser disfrazada como un evento casual cuyo origen, además, podía ser atribuido al Presidente.

A ello se añade la agresión desesperada y visceral sufrida por la TV Pública del Ecuador, por quienes califican al gobierno del Presidente Rafael Correa de dictatorial y totalitario (haciendo un abuso grotesco de las categorías mínimas de la ciencia política), justificando su accionar de esa manera: de hecho estábamos frente a una ruptura del sistema democrático, ya que ese tipo de acciones suelen caracterizar a los golpes de Estado.

Pero en esta ocasión no se cumplieron ciertos requisitos básicos para que podamos confirmar que estuvimos frente a un **clásico** golpe de Estado. Así, ninguna función del Estado, como ninguna institución de manera integral, ni siquiera la Policía Nacional, se involucró claramente en la crisis. En Honduras a Zelaya lo destituyó la función judicial, con la aquiescencia integral de las fuerzas armadas. Tampoco existió una cabeza visible que lidere la sublevación, no hubo el *‘quítate tú para ponerme yo’*, no apareció la figura que buscaba tomarse el poder. Por otro lado, si esa era la intención, también se le debió secuestrar al vicepresidente Lenin Moreno, a quien se lo acosó para intentar justificar una supuesta sucesión constitucional.

Lo que buscaban los conspiradores y desestabilizadores **en un primer momento** era debilitar, al menos como línea base, mediante una clara sublevación planificada, el proceso de la Revolución Ciudadana, el techo del intento del golpe de Estado era conseguirlo inmediatamente, mediante escaladas de agresión y brutalidad, tratando de movilizar a sectores sociales y grupos de carácter corporativo, regionales, políticos y étnicos, para posibilitar su audaz maniobra, y en caso de derrota, culpar al Presidente de estas acciones programadas.

En las últimas semanas los que han promovido maniobras como la revocatoria del mandato del Presidente Rafael Correa y últimamente se mostraron sospechosamente interesados en exigir la ‘muerte cruzada’, sobre todo buscan acelerar los tiempos políticos, generar una crisis integral, para intentar retomar el poder de cualquier manera, mediante alianzas transgénicas, antinaturales, entre las élites tradicionales y ciertos sectores subalternos organizados y estructuras políticas de “izquierda” claramente identificadas.

La ruptura de procesos políticos como la Revolución Ciudadana, no son problemas meramente técnicos sino complejas articulaciones político-sociales ante todo. Como lo demostró el golpe de Estado en Honduras, los golpistas tienen que hacer inmensos esfuerzos para que aparezca su golpe como algo hermenéuticamente legalizable. Además porque el actual contexto internacional desestimula y rechaza ese tipo de procedimientos, ya que los golpistas se arriesgan al aislamiento. La reacción rápida de nuestros hermanos latinoamericanos fue altamente gratificante. ‘Ecuador no es la república gobernada por los gorilas en Honduras’, pensaba la población que salió a defender a la República, la Democracia y a su legítimo Presidente.

Sin embargo, en el caso ecuatoriano, la vecindad con Colombia hace inviable la eficiencia de los efectos de un aislamiento ya que como sabemos, nuestros vecinos están claramente articulados a la geoestrategia imperial, y dentro de las prioridades del eje Washington-Bogotá, consta el contar con vecinos “confiables” de cara a la solución militar que se viene planteando con enorme fuerza desde principios de esta década.

El impacto de un golpe exitoso en Ecuador hubiese implicado una reestructuración fundamental de los campos políticos diplomáticos en el tratamiento del conflicto colombiano, aislamiento político de Venezuela y Bolivia, ruptura de la posibilidad de generar un bloque regional contra hegemónico. El nuevo tipo de golpe planteado tiene la

ventaja de ser opaco y prestarse a interpretaciones múltiples, previamente programadas, en caso de fracasar.

Estamos asistiendo a un nuevo tipo de intervención antipopular, antidemocrática, antirepublicana, antilatinoamericana, que no se puede interpretar desde los conceptos clásicos. Sin embargo, se están generando otras **MODALIDADES** de golpe de Estado que se pueden aplicar con similares efectos o consecuencias ¿A qué nos referimos con lo anterior?: al hecho de que los tipos de reacción social son mucho más comprometidos con los procesos de transformación, cambio y redistribución, en nuestros países existe una poderosa base electoral y social, por lo que hay que disfrazar los golpes mediante operaciones psicosociales, para que resulten eficientes puesto que deterioran los significados reales de lo que antes estaba muy claro. Hoy los medios, las élites, propugnan que esto fue una huelga, asonada, motín, cuando esa irrupción tenía claros objetivos de desconstituir los primeros esbozos de la nueva institucionalidad naciente.

El **magnicidio** del Presidente Correa hubiese significado un quiebre serio del proceso de la Revolución Ciudadana y en el peor de los escenarios un salto en caída libre al caos. Recordemos lo que significó para Colombia el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán: se produjeron enormes protestas populares, posteriormente se dio el período que se conoce como 'La Violencia' que incuba el apareamiento de las guerrillas, desarrollándose una guerra civil que hasta ahora no termina y que se ha degradado hasta lo inimaginable. Dado el carácter volcánico de nuestro pueblo posiblemente las consecuencias del magnicidio hubiesen sido aún peores.

Rafael Correa ya no es Rafael Correa, guste o no, es el Presidente de todos los ecuatorianos, es el líder que representa la esperanza de un pueblo que fue expoliado por el neoliberalismo, traicionado constantemente por los últimos presidentes electos, a los cuales se los derrocó en sendas insurrecciones populares. Rafael Correa ya no es Rafael Correa, es el Presidente que está llevando a cabo la recuperación del Estado y su institucionalidad, mediante un proyecto redistributivo, participativo, soberano, articulado a una concepción latinoamericanista y una visión de las relaciones internacionales heterodoxa, contra hegemónica, en un país que ya reunía todas las características para ser considerado un Estado fallido. El fracasado golpe de Estado nos devuelve a esa circunstancia.

La Revolución Ciudadana impulsa la recuperación del Estado mediante un reordenamiento y racionalización de la inversión fiscal, teniendo como uno de sus efectos la redistribución de la riqueza en beneficio de las mayorías, cuya primera fase apenas comienza a ser visible, puesto que la transformación institucional propuesta debe consolidarse en la segunda fase que está siendo bloqueada por los intereses elitarios, corporativos y pretorianos.

Si el Presidente Correa asistió al Regimiento Quito, es porque jamás fue prevenido por el sistema de inteligencia de lo que realmente se iba a producir en el lugar. Su estilo ha sido afrontar directamente los problemas, mucho más en un país donde el corporativismo ha generado una cultura política donde el único interlocutor válido es el Presidente de la República, ni siquiera sus ministros. El tratamiento de la ley de aguas con la Conaie fue definido por la exigencia de conversarlo directamente con el Presidente: los actores relevantes no aceptan los canales institucionales sino que quieren acceder directamente a la fuente decisional central.

Ello expresa no una voluntad personal sino una forma de la estructura societal y simbólica: lamentablemente Rafael Correa encarna personalmente el punto de agregación de una voluntad de cambio que no tenía otro canal de expresión luego de la crisis orgánica del régimen político antes señalada. El problema que tiene que confrontar

el Presidente en esta segunda fase, es precisamente la institucionalización, pero este es un proceso laberíntico, complejo y sometido a una serie de emboscadas.

La desarticulación dramática del Estado Nacional, los sistemas de representación se manifiestan con claridad en las enormes dificultades que la oposición tiene de generar un proyecto alternativo, democráticamente viable. Por ello, el atajo consiste en crear condiciones de desestabilización en instituciones clave de una manera anónima que permitan un repliegue estratégico, en caso de fracasar, para catalizar el conjunto de quejas corporativas mediante las antes mencionadas alianzas transgénicas.

En el escenario violento y caldeado que se generó en el Regimiento Quito, tensionado por actores interesados mediante pasquines, comunicaciones y acciones de movilización subterránea, usando la inercia heredada del carácter prebendal de las instituciones armadas, la ideología de la Doctrina de Seguridad Nacional, su socialización en el conjunto de la tropa y oficialidad, a lo que se suma la intervención de actores políticos claramente identificados; pudo haber sido inoportuno el discurso que dio el Presidente, ya que en vez de aplacar los ánimos, los encendió y también puede verse como un acto impulsivo regresar por segunda vez a ese regimiento, después que en una primera ocasión no pudo ingresar. Pero él no podía imaginar que se iba a actuar con semejante barbarie, si ponemos un símil, no se le puede acusar a una persona de incitar a ser asaltado por caminar en la noche.

En otra interpretación de los hechos, de buena acogida en el debate que se ha producido para comprender qué pasó el 30S, señala que hubo una clara conspiración planificada, que se iniciaba con la sublevación policial y en un claro efecto dominó de carácter ramificado y con diversos escenarios potenciales, a la que se sumaban otros actores para generar una atmósfera de ingobernabilidad, se buscó crear rápidas condiciones políticas que permitiesen a los golpistas y sus aliados oportunistas romper integralmente el proceso condicionando al poder constitucional. Planes que fueron distorsionados por la inesperada presencia del Presidente Correa en el Regimiento Quito. Ello quebró el libreto a los conspiradores, aunque en el modelo emergente de nuevo tipo de golpe de Estado, las maniobras comunicacionales e interpretativas permiten otros rangos de acción conspirativa a futuro: este es el punto en que nos hallamos.

Tiene lógica, pero nos preguntamos cómo resolvían los golpistas problemas políticos claves para consolidar su golpe: a) el vicepresidente de la República es leal al proceso de la Revolución Ciudadana; b) en la Asamblea Nacional la representación de Alianza PAIS es mayoritaria con la correspondiente consecuencia institucional; c) la función judicial está desprestigiada y al carecer de legitimidad social, no tiene capacidad política para pretender destituir al Presidente de la República como sucedió en Honduras; d) de igual manera la función electoral y la naciente función de transparencia y control social, no tienen forma de justificar un golpe porque se irían contra su propia naturaleza, más aún en la segunda fase de la Revolución Ciudadana, que consiste precisamente en el afianzamiento de las nuevas instituciones formulas en la Constitución del 2008.

Otra variante en esa hipótesis sería que frente a la ingobernabilidad creada y en el marco del estado de excepción, las FFAA declaran que asumen el gobierno de manera temporal hasta organizar elecciones en el cortísimo plazo, ya que un gobierno militar en estos tiempos es insostenible. Es decir, algo similar a lo que sucedió en Honduras, con la diferencia que es Micheletti (títere del poder real, los militares y la oligarquía) el que organiza las fraudulentas elecciones. Aquí también tendría que hacerse fraude, ya que de otra manera, Alianzas PAIS volvería a ganar las elecciones, otro grave e insoluble problema político para los golpistas.

Otra complicación que no han solucionado los conspiradores, como ya se insinuó anteriormente, es que las élites de la derecha y de las corporaciones pretorianas, no están

aun completamente coaligados, apenas empiezan a trazar una pretensión de estrategia conjunta. Esa posibilidad de acción común de la oposición tiene un severo límite en el carácter contra natura del modelo transgénico propuesto, además que no cuenta con la ventaja estratégica que aún mantiene el gobierno, así como con los efectos de la descarnada lucha de un liderazgo que no aparece por ninguna parte. El 30S significó la posibilidad de una potencial confluencia estratégica para la oposición. Por ello debe remarcar que la línea base trazada por los golpistas puede haber sido conseguida: Sociedad Patriótica si bien es la más efectiva fuerza política de la derecha, todavía no representa al conjunto de sus intereses, pero son el eje de acumulación más potente del campo antidemocrático, anti-institucional, retrogrado y desestabilizador.

La lección que debe dejar el **intento de magnicidio**, que **en si mismo significó una modalidad de golpe de Estado**, y sin entrar en detalles acerca de cómo el gobierno abordó la conducción de la crisis, exige la necesidad de que el ejecutivo se ponga de acuerdo en mecanismos claros que permitan manejar situaciones críticas, que se correspondan eficientemente con el enfoque conspirativo ramificado, acumulativo y en red. Ello implica una inversión reflexiva que vaya mucho más allá de la coyuntura dada.

Como nos enseña la teoría y experiencia histórica, en las crisis primero deberían intervenir otros niveles institucionales, y solamente en última instancia el Presidente de la República. Pero como ya se remarcó previamente, la estructura simbólica de acción en los actores relevantes (sociales, económicos, políticos e institucionales) pretende el acceso inmediato y directo a la fuente decisional más alta. Por ello el avance del proceso requiere la voluntad de impulsar una nueva cultura política que diferencie las nuevas prácticas de las tradicionales y cree con esa operación las bases para el nuevo país que todos queremos.

Además, se tiene que desarrollar un protocolo de seguridad presidencial, que impida al Presidente realizar actos que potencialmente atenten contra su seguridad, lo que a su vez significa atentar contra la seguridad y paz de todos los ecuatorianos. El Presidente dado el carácter de su investidura, responsabilidad, y en tanto representa el proyecto, la esperanza de un futuro equitativo, no puede ejercer su libertad subjetiva como cualquier ciudadano ¿Cómo estaría el Ecuador en estos momentos si hubiese tenido éxito el magnicidio? En adelante, el Presidente debe limitar y calcular bien su exposición pública.

Para concluir este acápite, el Centro Andino de Estudios Estratégicos, haciendo abstracción por un momento, del claro intento de magnicidio que en la crisis fue el segundo momento en el plan de ruptura democrática, expone a la comunidad nacional e internacional lo que considera la **modalidad empleada** en el golpe de Estado.

Nos hemos puesto de acuerdo en llamarlo, **golpe de Estado en red premoderno, posmoderno y transgénico**. Ello implica la combinación de las más arcaicas tradiciones de la cultura política de las élites excluyentes, ciertos poderes regionales y corporaciones tanto institucionales como sociales, que mantiene una orientación pretoriana, esto es la voluntad de aplicar la extorsión, chantaje y violencia, como instrumento fundamental de la acción política.

Se podría definir como posmoderno y transgénico, en tanto implica una movilidad y fluidez casi infinita del carácter de las alianzas posibles, con el objetivo de mantener los feudos originados en la negociación política tradicional: así pues, las más incoherentes relaciones carnales se pueden mantener para preservar los espacios arrancados a dentelladas a la ciudadanía, secuestrando conjuntamente y con objetivos instrumentales el orden democrático y republicano.

En la nueva modalidad golpista antes descrita, no es necesario identificar una cabeza (concentración) visible, sino desplegar acciones coordinadas en red, que es lo que

sucedió. La ausencia de una dirección identificable permite **diluir responsabilidades y significados del golpe**. Por ello, fue clave el control de los medios de comunicación como mecanismo de defensa para no facilitar la semántica y estrategia comunicativa de los golpistas, que de todas maneras ha cuajado. Hemos observado que de acuerdo a la lógica lingüística de los conspiradores, el Presidente Correa termina siendo el responsable de lo acontecido. En un manejo lingüístico perverso, se disfraza semánticamente de huelga, motín, asonada, sublevación, a un acto conspirativo, desestabilizador, anticiudadano, antidemocrático y antirepublicano.

En red porque en la multiplicidad del mundo social e institucional el disparador del golpe de Estado puede ubicarse en cualquier parte: se generan focos que en un momento oportuno son articulados, mediante una aplicación empírica de la teoría del caos. Por ello, la confusión semántica es posible. Carecemos aún de una teoría sustantiva de la naturaleza de este nuevo desafío reaccionario, su lógica, metodología y acción. La combinación de actores que se dio fue digna del ‘realismo mágico’: se inicia con los policías sublevados; continua con los militares de la FAE sumándose-solidarizándose con los policías, no sabíamos que ambas instituciones simpatizaban entre sí.

Los indígenas de Pachakutik (mitificados por la izquierda mundial, al estilo del buen salvaje de Roussau) convocan a la destitución del Presidente secuestrado, exigiendo después la intervención de actores externos para la investigación de lo acaecido; la asambleísta Lourdes Tibán demuestra con ello su enorme voluntad “antimperialista”, de esa manera el discurso de la plurinacionalidad y autonomía de los pueblos indígenas confluyen con la petición expresa de intervención externa sobre un proceso político nacional, lo que revela un elevado grado de esquizofrenia consecuencia de las mutaciones transgénicas propuestas por las corporaciones pretorianas, así, habían descubierto que sus anteriores represores son aliados clave en este momento para la consecución de sus objetivos corporativos; de la misma manera los “radicales y anti-imperialistas del MPD” descomponiendo su retórica revolucionaria, hacen malabares discursivos inauditos, se suben a las camionetas de la policía a arengar a los transeúntes, para que apoyen las supuestas reivindicaciones del “pueblo armado”, imagen condensadora de las operaciones de indeterminación semántica e irresponsabilidad política.

Por ello se deduce con altísimo grado de verosimilitud que se esperaba la activación y confluencia de otros sectores y sujetos políticos para generar un efecto de contaminación toxica acumulativa y desbordante. No es el asalto inmediato al poder, no es la toma de Carondelet. Sino generar una fisura en la represa que provoque en un tiempo determinado su quiebre integral e inunde el valle de la democracia y sus instituciones damnificando a todos/as los/as ciudadanos/as.

El trazado estratégico es crear ondas que desestabilicen el proceso democrático y la desestructuración del proyecto de la Revolución Ciudadana, a través de generar puntos en conflicto confluyentes; **no es oposición democrática** son conspiradores al servicio de intereses oligárquicos, antinacionales e imperiales. Por ello es necesario comprender el carácter de la estrategia desestabilizadora, **que no es clásica, no puede serlo**. Esta es la razón de la urgencia de postular interpretaciones diferenciadas, correspondientes a una lógica nueva en proceso de gestación, para poder responder a las urgentes demandas de acción política en contextos muy distintos a los percibidos por las teorías conocidas. Los conspiradores también aprenden de sus fracasos: los intentos golpistas en Bolivia y Venezuela. Y buscan afinar su tecnología política en golpes de Estado para atenuar el mal olor que dejó el exitoso golpe de Estado en Honduras. Ello implica que han sistematizado con mayor afinamiento sus supuestos teóricos aunque no lo expresan de manera frontal.

Le llamamos golpe de Estado premoderno posmoderno y transgénico porque no encaja en el clásico golpe de Estado, ni cumple todos los requisitos del posmoderno. De ahí el gran debate que el tema ha generado y la importancia de profundizar en su estudio.

Por qué el magnicidio perfecto

Describamos sucintamente el escenario de los hechos: tenemos a un Presidente con su característica personalidad y estilo, su capacidad de concentración carismática de un proyecto antes disperso, aspecto conocido por los conspiradores y funcionalizado a sus planes, por lo cual es el objetivo clave en cualquier eventualidad orientada a la destrucción del proyecto de la Revolución Ciudadana. En el marco del contexto político antes descrito y manipulación ejercida al personal policial, tenemos a cientos de descontentos que protestan por sus supuestas reivindicaciones económicas: el Presidente no logra, como era lo previsible en esas condiciones, persuadir a los sublevados de los beneficios de la ley. El Presidente intenta retirarse del lugar, pero se lo agrede, se crea caos en la zona, y se ve obligado, dado su estado de salud y la brutalidad de los maltratos a los que fue sometido, a refugiarse en el Hospital de la Policía que es un edificio vecino del Regimiento Quito.

Ahí los conspiradores proceden a cercar el hospital, impidiendo la salida del Presidente, ya que se generaron condiciones en el exterior que no brindan garantías para evacuar al Presidente. Es decir, lo que se 'secuestra' no es al Presidente sino al edificio, por decirlo de alguna manera y ser más exactos, para ello se usa a los pacientes y personal médico como escudos humanos. Y se ejecuta otra operación de deslizamiento semántico. El Presidente, como todo el mundo lo pudo apreciar, emitió mensajes a través de los medios públicos. No perdió contacto con sus ministros. No le requisaron su teléfono, ni estuvo aislado, ya que el piso y habitación donde se encontraba estaba controlado por fuerzas leales al Presidente, y ahí, como él mismo declaró, recibió a tres comisiones diferentes de sublevados, y de nuevo les expuso los beneficios de la ley. Pero era un secuestro en el sentido de que el Presidente no puede salir del hospital, lo que él representa ha perdido libertad de acción, ergo se crea un vacío de poder, ese es el mensaje simbólico que se proyecta a la sociedad y lo que necesitan los conspiradores para sus planes, simultáneamente la ambigüedad de la situación, tal cual era presentada por los golpistas, posibilitaba nuevamente mutaciones significativas en caso de fracasar en sus intentos, mutaciones que fueron apropiadas por los grandes medios en su interpretación interesada de los eventos del 30S.

Así, en esa situación, llega la noche, habían transcurrido más de diez horas desde que el Presidente se refugió en el hospital y se produce la "operación de rescate" del ejército pero empleando desde nuestro punto de vista un inseguro, contradictorio y poco profesional operativo que en el caso de producirse la muerte del Presidente, esta hubiese sido tan obscura e inidentificable la forma como se sucede que generaría otro deslizamiento significativo: nadie sería responsable, algunos abogados defensores del golpe lo calificarían como un 'delito de muchedumbres' o una casualidad fatal.

Lope de Vega en su "Fuenteovejuna" planteó un problema penal: luego de escuchar el informe del juez que investigaba la muerte del Comendador, y ante aquella repetida respuesta "Fuenteovejuna, señor", el Rey con sabiduría sentencia: "Pues no puede averiguarse". Con ello el autor reconoce, por un lado, la imposibilidad de investigar un hecho delictivo realizado por una muchedumbre y el problema de su juzgamiento; y por otro, la dificultad que habría para declararlos culpables a todos, en cuyo caso se opta por el perdón. Pero el Comendador ya está muerto.

De producirse la muerte del Presidente Correa, a quién se le podía echar la culpa: ¿A los policías sublevados, a los militares con mala puntería, a los francotiradores o paramilitares infiltrados con la misión clara de asesinarlo? Tal cual se ha usado esta

teratológica capacidad interpretativa, resulta que al final, el responsable hubiese sido el asesinado: de todas maneras la obscuridad ha sido optimizada por los hábiles medios. Nos preguntamos si ello no se corresponde con una estrategia deliberada, que permite la agresión mediática a la que asistimos hoy. El magnicidio de un líder como lo es el Presidente Rafael Correa, no es un problema meramente técnico sino político ante todo. El cálculo debe contemplar que el asesinato no se vuelva un boomerang en contra de los complotados y los intereses que desean preservar.

Debemos insistir, esta compleja serie de mutaciones discursivas no solamente servirían para justificar el magnicidio, sino tal como sucedió, si fracasase crear un empantanamiento útil para la acumulación de fuerzas, orientada para una conspiración en un nuevo momento. Confundiendo y aprovechando el fracaso en operaciones mediáticas sofisticadamente articuladas y capaces de responder de manera adaptativa a cualquier posibilidad que se pueda presentar.

Operativo de “rescate” por parte del ejército

El operativo de “rescate” por parte del ejército, se desarrolla de tal forma, que genera muchas dudas ¿A qué se debió tantas deficiencias tácticas y de evaluación previa? ¿Falta de profesionalismo de la Brigada de Fuerzas Especiales que estuvo al frente del operativo? Lo dudamos, esa unidad es una de las mejores entrenadas y experimentadas que tienen nuestras FFAA y eso el ejército peruano lo experimentó en carne propia en la guerra del Cenepa. Si bien la doctrina militar y organizacional está orientada a la defensa externa en escenarios de batalla abiertos, cabe preguntarse si ¿Acaso los militares no están entrenados aunque sea subsidiariamente para operaciones urbanas? Posiblemente, pero participó un grupo denominado Grupo Especial de Operaciones – GEO especializado en antiterrorismo, amenaza que suele ser definida como ejecutable en escenarios urbanos. En fin ¿qué paso?

Revisemos algunos hechos que sustentan las dudas:

- 1) Para quienes estuvimos ‘esquivando las balas’ nos llamó poderosamente la atención (y en los videos se observa) como se produjo la aproximación de las fuerzas que van a “rescatar” al Presidente. Éstas se acercaron al hospital en camiones, que se parquearon a no más de 200 o 300 metros del mismo, es decir, al alcance de los francotiradores apostados en los techos. Los soldados caminaban de abajo hacia arriba prácticamente sin cubrirse y sin elementos que los protejan, con la amenaza de que se espera a fuerzas policiales atrincheradas en el hospital.

Nos preguntamos ¿Por qué no se utilizaron tanquetas para hacer un corredor y cubrir la aproximación de los militares, como cualquier comandante responsable por la vida de sus soldados lo hubiese hecho? Su objetivo no tenía que ser agresivo necesariamente, simplemente para proporcionar un escudo blindado previendo la balacera que se venía.

Para sorpresa nuestra, luego de los acontecimientos vimos a las tanquetas parqueadas en el intercambiador de Carcelén, un lugar al norte de la ciudad de Quito ¿Por qué no se las usaron? Salvo que exista una explicación estratégica, que no ha sido explicada por nadie, por ejemplo, la posibilidad de la intervención de otras unidades policiales como la de Pusuquí, esto es incomprensible. Las fuentes consultadas nos informaron que las tanquetas salieron de la ciudad de Ibarra a no más de las 17H00, es decir, estuvieron en Quito a las 19H00 o 20H00 a lo mucho. La declaratoria del estado de Excepción se dio a las 13H30, el operativo

de rescate recién se inició aproximadamente a las 20H30. Lo cual denota la carencia de planes de contingencia frente a situaciones críticas.

Ante la constatación de la presencia, incluyendo sus posiciones, de francotiradores de la policía como se ha dicho, cabe preguntarse por qué no se les neutralizó antes de la aproximación de los militares, incluso antes para proteger la vida de los civiles que apoyaban al Presidente. El ejército tiene el armamento y la técnica para hacerlo. No dar ese paso previo, implicó un gran riesgo para los militares debido a la forma como se aproximaron al carácter de su despliegue operativo.

Tenemos entendido, que la única unidad que tiene francotiradores de **manera orgánica** en la Policía Nacional es el Grupo de Intervención y Rescate – GIR, y ellos en lo fundamental fueron leales al Presidente, son los que cubrieron con sus propios cuerpos el carro con el cual se evacuó al Presidente.

Se tiene que hacer un peritaje del tipo de calibre que impactó a las víctimas, vehículos y edificios. La policía tiene armamento de incursión urbana y el ejército de guerra.

- 2) Se produjo una tremenda balacera, aproximadamente de 60 a 90 minutos, y luego de la evacuación del Presidente, siguieron los disparos. Eso generó un escenario de intenso enfrentamiento entre policías y militares, pero la realidad fue que muchos tiros por parte del ejército, fueron al aire, seguramente correspondiendo a una acertada decisión política para no provocar enfrentamientos innecesarios, ya que el objetivo era rescatar al Presidente, y no eliminar a los sublevados.

El grueso de ellos contaba con sus armas de dotación que son las pistolas Glock, entregadas por el gobierno del Presidente Correa. Es decir, frente al armamento con que cuenta el ejército, los sublevados estaban en desventaja de poder de fuego, pero en ventaja posicional y numérica. La evaluación situacional implicaba leve superioridad de combate por parte de la policía, ergo con más razón el dispositivo militar debió haber contemplado el uso de material blindado, orientado básicamente a la protección de las tropas involucradas en el operativo.

El rastrillo del Regimiento Quito, no logró ser abierto por los sublevados. Es decir, ellos no llegaron a contar con recursos materiales, armamento y munición para optimizar su débil ventaja comparativa. Así mismo tampoco lograron obtener la capacidad para enfrentar una ofensiva militar potencialmente abrumadora. Si los sediciosos se tomaban el rastrillo, el enfrentamiento hubiese pasado a mayores.

Cuando se ordene una auditoría operativa del “rescate”, como parte indispensable de los procesos de investigación del frustrado magnicidio y golpe, ente otras cosas se debe determinar, cuantos militares fueron heridos a causa del armamento corto oficial de la policía, calibre 9 mm, y cuantos por calibres de armas largas, que también se usaron por parte de los francotiradores policiales contra el ejército y la población.

Las únicas unidades policiales que tienen fusiles y entrenamiento capaz de ‘hacer algo de calor’ al ejército son tres: el Grupo de Operaciones Especiales – GOE, que es una unidad táctica con jurisdicción provincial, es decir, cada provincia cuenta con un GOE; el Grupo de Intervención y Rescate – GIR, que es una unidad táctica con jurisdicción nacional, es decir, se moviliza en donde se lo necesite; y el Grupo Especial Móvil Antinarcoóticos – GEMA, que como su nombre lo indica, se lo

utiliza básicamente en operaciones tácticas antinarcóticos. Ello complica la percepción de que estas unidades de élite estuvieron integralmente vinculadas al respeto del orden constitucional.

Recalamos que en lo fundamental (no el 100%) el GOE como el GIR se mantuvieron leales al orden democrático. Es más, el GOE es el que impide que los sublevados se tomen el piso del hospital en donde se encontraba el Presidente y el GIR como habíamos señalado cubre con sus cuerpos la salida del carro que evacua al Presidente. Automóvil que a propósito NO era blindado como se ha dicho, puesto que pertenecía a una asambleísta de Alianza PAIS y no a la estructura de seguridad presidencial. El Cabo Froilán Jiménez que hace de escudo y muere, pertenece al GIR. Es un héroe, el pueblo ecuatoriano debe reconocerlo así, ya que su sacrificio permitió salvar la vida del Presidente y con ello evitar los inimaginables desenlaces que el magnicidio hubiera provocado.

Cabe destacar que la población que se movilizó y se mantuvo todo el tiempo presionando en todas las calles que rodean al hospital y fue duramente reprimida por los sublevados, al ver llegar los camiones del ejército los vitoreo y los acompañó hasta que se prendió la balacera, nadie imaginaba que frente a semejante fuerza militar los sublevados se atrevan a disparar.

La presión ejercida por la población en los alrededores del hospital de la Policía fue fundamental para ejercer presión moral, psicológica y política sobre las fuerzas policiales sublevadas y de esta manera contribuir a preservar la vida del Presidente de la República.

- 3) La muerte del Cabo Froilán Jiménez según versiones de prensa se produce por una bala de alto poder, capaz de atravesar chalecos antibalas. Si se revisa los videos, se observa que él se ubica en el flanco norte del carro en movimiento bajando por la Av. Mariana de Jesús y cubre el lado del automóvil en que están apostados fuerzas amigas. El francotirador que intentó asesinar al Presidente para tener ángulo de disparo debió estar ubicado no en los techos de los edificios que son altos, sino en un nivel que permita tener visión sobre las ventanas del automóvil.

Ello implicaría la existencia de un dispositivo de francotiradores que no se limitan a las terrazas donde fueron ubicados, sino que supuso un despliegue más complejo de francotiradores clandestinos, dispositivo que debió haber sido programado con antelación, mediante planes operativos previos a la presencia del Presidente.

Si no era posible usar las tanquetas por alguna razón, es lícito preguntarse por qué no se utilizó los camiones que transportaron a los militares para cubrir la puerta de entrada del hospital y de esta manera dificultar la tarea de francotiradores y sublevados; un comandante de campo, encargado del operativo inmediato debe ser capaz de improvisar y optimizar los recursos existentes en un escenario de combate, ello implica la capacidad de optimización de los recursos técnicos, materiales y humanos a su acceso. Los camiones podían ser perfectamente usados para resguardar al Presidente de los ecuatorianos, y con ello hacer una caravana sólida con suficiente protección defensiva.

La planificación debió contemplar que para salvar la vida del Presidente se tenía que usar los medios que lo permitan, no se podía correr ningún riesgo. Esa es la elemental lógica que debió haber primado, entonces se debió usar una tanqueta para evacuar al Presidente. Era muy fácil que la tanqueta se ubique en la puerta

de entrada del hospital, se meta al Presidente en la misma y salga. El carro utilizado no garantizaba la evacuación del Presidente con vida.

Además de esta manera, no hubiese sido necesario que los miembros del GIR tengan que cubrir con sus propios cuerpos el carro que saco al Presidente. Una muestra más de la profesionalidad y heroísmo con la que actuó el GIR y que fue factor fundamental para que fracasase el magnicidio. Además se sabe que un miembro del GIR se vio obligado a conducir el carro, ya que el chofer militar no apareció ¿Qué hubiese sucedido si una bala asesinaba al chofer del carro mientras se evacuaba al Presidente?

- 4) Es imposible, que la Dirección General de Inteligencia – DGI, de la Policía Nacional, no se haya enterado, en esos días, del malestar que existía en el personal policial. En caso de haber sucedido esa eventualidad inconcebible ello revelaría un nivel de incuria e irresponsabilidad enorme. No se puede ocultar el fastidio de la tropa en un tema como el que provoco la sublevación ¿Se previno al Presidente de la República de los escenarios posibles? Como ya se ha señalado, los hechos demuestran que no, el Presidente tiene su característica personalidad y estilo, pero no es de ninguna manera inconsciente como para entregarse en “bandeja de plata” a los sediciosos, si se lo hubiese advertido de lo que podía pasar. Creemos que él consideró que su presencia podía haber solucionado el conflicto, ese ha sido su modo de actuar.

En general se observó ausencia de una estructura de inteligencia que prevenga y de cuentas de la situación interior de la Policía.

- 5) Un tema que debe provocar una profunda investigación, es la actuación del equipo de la Seguridad Presidencial. Según las informaciones de prensa y Teleamazonas, se alteró el dispositivo normal de seguridad presidencial reduciéndolo en condiciones potencialmente riesgosas. ¿Cómo y por cuanto personal estuvo compuesto? Cuando el Presidente asiste al Regimiento Quito, ya el personal policial se había tomado las instalaciones y estaba en franca sublevación, desde que se sabía que a las 5H00 de la mañana la policía de migración había suspendido sus actividades en el aeropuerto, según el diario El Comercio. Nos preguntamos ¿La seguridad presidencial tomó las debidas precauciones técnicas y logísticas para sacar al Presidente de un escenario que ya estaba complicado cuando él decidió asistir? Al ver los videos, la impresión que da es que no. Es más, las personas que en primera instancia protegen y asisten al Presidente cuando es agredido y le lanzan una bomba lacrimógena, son funcionarios del Ministerio Coordinador de la Política y asesores que acompañaron al Presidente.

Hace poco tiempo se hizo una auditoría de seguridad al sistema de seguridad presidencial ¿Qué salió de ese estudio? ¿Qué correctivos se realizaron?

En conclusión, creemos que fue el GOE y el GIR, unidades tácticas de la Policía Nacional, a más de los funcionarios que establecieron controles en el piso del hospital, quienes fueron, en lo fundamental los que salvaron la vida del Presidente de la República. La combinación de graves errores de inteligencia, información y dispositivo de seguridad, sumadas al caótico operativo desarrollado por el ejército, pudo haber contribuido, a que potenciales ‘fuerzas oscuras’ infiltradas en la escena, asesinen al Presidente.

Resta aún una pregunta clave: la combinación supuestamente fortuita de estas graves fallas institucionales se conjugó con la intervención de ciertos actores

políticos plenamente identificados, quienes se ocultan en la densa niebla del deslizamiento semántico ¿Dónde están los decisores políticos que acolitaron la conspiración que pudo haber desembocado en el magnicidio y guerra civil? ¿Cuáles son los titiriteros estratégicos del golpe de Estado?

Urgencia de la reestructuración de la inteligencia

El Centro Andino de Estudios Estratégicos advirtió con anterioridad las enormes debilidades y fragilidad de un sistema de inteligencia penetrado y cooptado por otros servicios y por composiciones internas de poderes dentro de la misma. Así que no debe sorprendernos que hayan aparentemente fracasado en la previsión de los acontecimientos. Desde nuestro punto de vista, es perfectamente argumentable que fueron parte confluyente de la conspiración y en ello incluimos a la seguridad presidencial.

La operación de rescate aparece, retrospectivamente, como pensada y ejecutada de manera inconsistente. Por otra parte, los canales técnicos de inteligencia o fracasaron estrepitosamente o miraron hacia otro lado. Cualquiera de las dos conclusiones posibles es más que alarmante.

En un documento que elaboramos en noviembre del 2009 decíamos textualmente: “El gobierno (...) parece no tomar conciencia de la amenaza existente. En momentos hay ingenuidad y candidez en las autoridades responsables de la seguridad, inteligencia y defensa. Recordamos que en los últimos siete años ha habido cuatro golpes contra las democracias latinoamericanas...”¹

La articulación conspirativa debe ser develada hasta sus últimos resquicios. Sus autores operativos y estratégicos tienen que ser abiertamente identificados, destruir sus redes y construir un sistema de inteligencia sobre nuevas bases. Ello implica un rediseño y cambio no solamente de las estructuras institucionales, sino también de los mandos civiles. Es una situación bisagra, vivimos un momento crítico, es un punto de inflexión que requiere la toma de decisiones fundamentales, que si no se las realiza, el riesgo para la comunidad política, la democracia y el proceso político de la Revolución Ciudadana es enorme.

Los hechos del 30S demostraron que no se produjo la mentada renovación del sistema de inteligencia a consecuencia del bombardeo de Angostura. Los cambios apenas fueron cosméticos.

Reestructuración de la Policía Nacional

La reestructura de la policía debe incluir el despojo de sus pretensiones de jerarquía militar, hay que civilizarla en términos de transformarles en una verdadera policía civil nacional, subordinada al poder político democrático. Fragmentarla bajo distintas referencias de autoridad en la línea de lograr una alta especialización, lo que repercutirá en un aumento de la eficiencia en el combate al crimen común y organizado. Tal como está constituida y frente a la evidencia de los hechos, vemos que la estructura de la policía es totalmente anacrónica, se

¹ CENAE; “Movimientos geoestratégicos, operaciones de inteligencia y psicológicas en el calentamiento del escenario andino. Hipótesis de guerra”, Noviembre 2009. Quito-Ecuador

tiene que eliminar, el tal Consejo de Generales, Estados Mayores, etc., propias de una organización militar.

Un pie de fuerza de aproximadamente 45.000 policías les convierte en el poder armado más numeroso del Estado y abarca de manera metastásica a nombre de la seguridad, al conjunto de la Nación a la cual precisamente ha agredido con las armas que le proporcionó la República, defendiendo intereses corporativos pretorianos a través del uso indignante de recursos públicos, sin impórtales que se atentó gravemente contra la seguridad y paz del conjunto de la comunidad ecuatoriana y articulándose a determinados intereses geoestratégicos externos.

No se puede tolerar la insubordinación de una institución armada orientada precisamente a la seguridad interna y con ello destinada a preservar las instituciones de la democracia. Por ello urge una reestructuración integral y sistémica.

Se tiene que desvanecer ese poder arrogante, despótico y brutal que se expresó claramente en las comunicaciones y en el lenguaje empleado durante su sublevación: “Maten a Correa”, “Llévenle a Nono (desaparecerlo)”, “Nosotros somos los reyes de la ciudad”, “Ya vienen los chuspangos (militares)”. Su irresponsabilidad estuvo a punto de llevar al Ecuador a una guerra civil.

Como señalaba Weber, las instituciones coercitivas del Estado son emisarios, no propietarios de la violencia legítima, pero aquel tipo de apropiación individualizada, sectorial y corporativa de aquello que nos pertenece a todos se vuelve violencia ilegítima que responde a intereses particulares.

No se puede perder el tiempo en recomponer una cadena de mando, bajo esquemas que han demostrado su caducidad. Insistimos que se debe reestructurar la policía y fragmentarla en diferentes organismos altamente especializados pero con jurisdicción nacional en sus ámbitos de competencia, cuidando de no repetir experiencias fracasadas como la policial de México.

La conspiración continúa

Continúa porque el factor desencadenante de la crisis fue una ley que se enmarca en la construcción de una nueva institucionalidad y las fuerzas conspiradoras emplean diferentes estrategias, que generan tensiones que se concentran en la Asamblea Nacional, con el objetivo de impedir que pasen los instrumentos normativos que impulsan el proyecto de cambio. La derecha ecuatoriana aprendió la lección de Venezuela, allá en un principio ‘los escuálidos’ se autoexcluyeron del parlamento, lo que favoreció el avance del proceso bolivariano, hoy los mismos ‘escuálidos’ andan felices con la fuerza parlamentaria que han obtenido.

Preocupa que muchos de los cambios que impulsa la Revolución Ciudadana no sean conocidos o comprendidos por la sociedad. Hay publicidad y no comunicación, más propaganda que desarrollo y toma de conciencia social. El corporativismo generalizado que existe ha impedido a muchas organizaciones autocalificadas de “izquierda” a que adopten una perspectiva estratégica de cambio y se encuadren en mezquinas negociaciones o presiones para mantener beneficios corporativos.

En ese marco, preocupa el re-posicionamiento de las FFAA como resultado de la crisis, la misma que les puede otorgar un nivel de autonomía no acorde a la nueva

institucionalidad democrática. Como todos pudimos observar y muchos analistas coinciden, la actuación de las FFAA lució condicionada. Si bien se hace la respectiva declaración 'políticamente correcta', su lenta reacción generó inquietudes. Por ello, el Gral. Ernesto González jefe del Comando Conjunto, debe ser evaluado profundamente para poder seguir en esa función, de igual manera el comandante de la FAE, ya que perdió el control sobre sus subordinados. No se debe subestimar el rol de determinados sectores, ya identificados, de las FFAA en la sublevación.

Es necesario estudiar a nivel de percepción qué imagen mental se forjó la población ecuatoriana gracias al susodicho "operativo de rescate" por parte del ejército. La intuición nos dice que a la ciudadanía le quedó la apreciación de que fueron los militares los que rescataron al Presidente, posicionándose como actores de peso, rodeados de una aureola especial de poder, esto es peligroso y no compatible en un estado de democracia moderna.

Un problema que los conspiradores no han visualizado es que una ruptura del orden democrático contará con fuerzas militares que se opongan a la misma. Hay desarrollo de conciencia democrática, no se trata de defender a Rafael Correa, se trata de preservar el orden constitucional, y que sea el pueblo el que decida su destino en procesos democráticos. Ese es el signo que debe primar en sociedades civilizadas.

No se debe retroceder en la conducción política del mando civil, mismo que debe seguir prevaleciendo en las instituciones políticas de seguridad, defensa e inteligencia.

La institución presidencial debe emprender rápidamente una estrategia de reposicionamiento frente a las FFAA y Policía Nacional, se debe eliminar toda percepción de que depende de las mismas para ejercer su poder constitucional, dando claras señales de que las mencionadas instituciones están bajo control democrático.

Proyecciones políticas

Se acabó el momento del cambio institucional desde arriba, empujado por el proceso electoral plebiscitario. Es el momento de estructurar políticamente los acuerdos, pero con quién y de qué forma es la pregunta a responderse.

La posibilidad de la 'muerte cruzada' quedó inhabilitada políticamente por el momento, y ese es uno de los logros de los conspiradores, ya que lo contrario hubiese permitido re-legitimarse al Presidente Correa y contar con un tiempo político precioso que constitucionalmente le facultaba al Presidente, mientras se convocaba y organizaba las elecciones, a expedir decretos-leyes que hubiesen conseguido acelerar y profundizar las transformaciones económicas en la línea del socialismo del sumak kawsay/buen vivir.

Alianza PAIS es una federación compleja de intereses, grupos y tendencias, que fácilmente puede ser desestructurado porque se mantiene en torno a la figura del Presidente Rafael Correa, por ello es vital, que en su primera y próxima Convención Nacional se dé pasos acelerados en la estructuración de una organización política, llámese movimiento o partido, que permita blindar el proceso de la Revolución Ciudadana. Las revoluciones no deben depender de individuos, se necesita una estructura política que dé sostén y proyección en el largo plazo desarrollando lazos con la sociedad y articulando su multiplicidad.

Los conspiradores, que no son bajo ningún concepto oposición democrática, van a escoger canales no institucionales para acabar con el proceso de la Revolución Ciudadana.

El gobierno tiene como una de sus tareas post crisis, recrear su legitimidad impulsando una agresiva y eficiente fiscalización. Recordemos que ese ha sido un punto recurrente en el ataque mediático de los desestabilizadores. La lucha contra la corrupción debe profundizarse lo que implica el impulso de una reforma y campaña sanitaria profunda del sistema judicial.

Concluimos finalmente señalando que la post crisis abre una tercera fase de la Revolución Ciudadana donde su éxito dependerá de las decisiones y estrategias que se definan en cinco grandes ejes:

- 1) Convertir a alianza PAIS en una organización estructurada y disciplinada.
- 2) Urgente y correcto tratamiento al sector seguridad, defensa e inteligencia. El escenario golpista que vivimos el nefasto jueves treinta no se ha agotado, se ha replegado temporalmente, para potencialmente retornar con mayor fuerza de no operarse cambios importantes en los modelos y acciones gubernamentales.
- 3) Desplegar la institucionalidad postulada por la Constitución lo antes posible para así proporcionar la legitimidad necesaria al proceso en curso.
- 4) Desarrollo de una base social organizada propia y aliada.
- 5) Definir con claridad la estrategia y hoja de ruta del viraje a la izquierda y radicalización del proceso de la Revolución Ciudadana.